

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto de Interlocutorio No. _

Santiago de Cali, dieciocho (18) de enero de dos mil veintiuno (2021).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Reparación directa
REFERENCIA:	76001-23-33-009-2015-00292-00
DEMANDANTE:	Carmen Elena Obregón y otros mayafernanda@hotmail.com
DEMANDADO:	Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial

PRUEBA DE OFICIO

Encontrándose el proceso para dictar fallo de primera instancia, encuentra la Sala que existen puntos difusos en el presente litigio, por lo que se hace necesario aplicar el artículo 213 del CPACA, que contempla:

*“**Artículo 213.** Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.*

Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días. En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decreta pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decreta.” (Subraya la Sala)

Lo anterior con el fin de que la decisión de fondo se ajuste a derecho, concretamente para determinar lo señalado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en reciente sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 (Rad. 66001-23-31-000-2010-00235-01 (46.947), en la cual modificó su jurisprudencia en asuntos de privación injusta de la libertad, en los siguientes términos:

*“**PRIMERO: MODIFICASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCION TERCERA** en relación con los casos en que la Litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y **UNIFICANSE** criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, es esos casos, el juez deberá verificar:*

1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la



Constitución Política;

2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil-análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,

3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. (...)"

Lo cual significa que, a partir de la sentencia de unificación, el juzgador deberá resolver sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, independiente del motivo que dio lugar a la libertad del proceso, atendiendo a los criterios fijados en la aludida sentencia.

Ahora, si bien se remitió copia por parte del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Buga, con radicación SPOA 76-001-6000-163-2008-00807-00 de las actuaciones en primera instancia por parte del Juzgado Primero Especializado del Circuito de Buga y en segunda instancia por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Sala Penal, no se aportó copia del audio (CD), ni del acta de la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento de fecha 13 de noviembre de 2009, realizada por los Juzgados Segundo y Quinto Penal Municipal con función de garantías de Buenaventura, las cuales se hacen necesarias para el esclarecimiento del presente Proceso.

En consecuencia, esta Sala de Decisión,

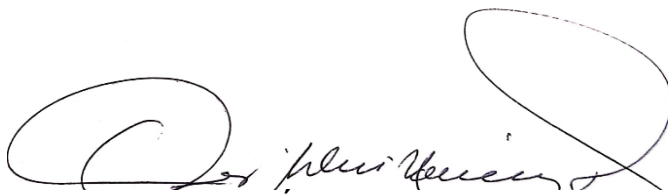
RESUELVE

REQUERIR a los Juzgados Segundo y Quinto Penales Municipales con función de garantías de Buenaventura, así como al Juzgado Primero Especializado del Circuito de Buga, radicado en este último con el número 76-001-6000-163-2008-00807-00 para que dentro del término improrrogable de diez (10) días, remitan copia del audio (CD) y del acta de audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento de fecha 13 de noviembre de 2009, realizada a los imputados: Luis Hernando Vargas Aramburu, Jaime Palacios Gómez, Luis Enrique Angulo Córdoba, Jesús Edward Acosta Triana, Jacqueline Valencia Anizares, Gilberto Luis Peña, Aristóbulo Rodríguez Miranda y Carmen Elena Obregón Lasso (accionante) C.C No. 29.226.540, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, agravado.



NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

Los Magistrados,



OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA



OMAR EDGAR BORJA SOTO



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS